

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

RESOLUCION N°

0000986

2018

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR"**

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. teniendo en cuenta lo dispuesto en la Constitución Nacional, Ley Marco 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015, la Ley 1333 de 2009, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

El 12 de junio de 2015 funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA, en compañía de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, DAMAB, Secretaria de Gobierno, Policía Ambiental, Triple A S.A. E.S.P y otros, realizaron visita de inspección técnica en la zona ubicada en el margen oriental, sentido norte sur, de la vía de acceso al antiguo relleno sanitario el Henequén.

De la visita anteriormente señalada, el DAMAB expidió concepto técnico N° **000035 de 2015**, el cual fue solicitado por la CRA mediante oficio radicado con la numeración 4008 de fecha 10 de agosto de 2015.

El DAMAB mediante oficio No. 7313 del 12 de Agosto de 2015 remitió a esta corporación alrededor de 25 informes técnicos generados por la visita de inspección realizada a los predios adyacentes al antiguo relleno sanitario Henequén, incluyendo el informe técnico N° **000035 de 2015**.

Que con la finalidad de incluir tanto la información recaudada por el DAMAB, como la recogida por los funcionarios de esta Corporación, se realizó el informe técnico N° **0001708 de fecha 30 de diciembre de 2015**, del cual se resalta:

"OBSERVACIONES DE CAMPO

Al momento de la visita de inspección técnica se observó la Disposición de manera inadecuada de Residuos Sólidos de Construcción (escombros), Residuos Sólidos Comunes (Basuras) trayendo como consecuencia posible taponamiento de cauce de aguas de escorrentía de aguas lluvias no continuas (arroyo) que franquea el predio en sentido oeste – este, y que recoge y drena las aguas provenientes de la ladera occidental del distrito de Barranquilla, sector Miramar. En el predio donde se observó la disposición inadecuada de los residuos sólidos de construcción (escombros) y los residuos sólidos comunes (Basuras), viven personas encargadas de cuidarlo y no dan información del propietario.

De igual forma se observó además de los residuos sólidos de construcción (Escombros) la disposición inadecuada de llantas usadas de vehículos, retales y estibas de madera, plásticos de alta y baja densidad (Bolsas), icopores, entre otros residuos.

(...)

(...) contra el propietario del predio ubicado en camino Henequen acera oriental Referencia Catastral No 02 – 0303, georreferencia latitud 11°0'26.45' N – Longitud 74°50'39.45' O, zona de expansión urbana; por no contar con las autorizaciones, seguimientos y/o permisos ambientales necesarios, para las actividades desarrolladas en el predio, tal como se encuentran consignado en la parte evaluativa del presente concepto técnico.

(...)"

Posteriormente, mediante el Auto N° 00104 del 31 de marzo de 2016, se ordenó el inicio de una indagación preliminar en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, en el cual se dispuso lo siguiente:

(...) PRIMERO: Ordenar el inicio de una Indagación Preliminar por el término de seis (06) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto administrativo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Providencia, con la finalidad de

10-12-18

Z. I.

Pag 32

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

RESOLUCION N°

0000986

2018

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR”**

determinar el(los) propietario(s) del predio ubicado en camino Henequen cera occidental Referencia Catastral No 02 – 0303, georreferencia latitud 11°0'26.45' N – Longitud 74°50'39.45' O, zona de expansión urbana.

SEGUNDO: *Requírase al Instituto Geográfico Agustín Codazzi del distrito de Barranquilla para que remita dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la notificación correspondiente, toda la información documentada mediante el cual se identifique al(los) propietario(s) del predio ubicado en camino Henequén cera occidental Referencia Catastral No 02 – 0303, georreferencia latitud 11°0'26.45' N – Longitud 74°50'39.45' O, zona de expansión urbana. (...)*”.

Que mediante oficio N° 3526 del 10 de julio de 2017, se le solicito al señor NELSON BARRIOS, Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del Distrito de Barranquilla, para que remitiera a esta Corporación la información documentada mediante el cual se identifique al(los) propietario(s) del predio ubicado en camino Henequén cera occidental Referencia Catastral No 02 – 0303, georreferencia latitud 11°0'26.45' N – Longitud 74°50'39.45' O, zona de expansión urbana. (...). Y a la fecha no se ha recibido respuesta.

Que, de acuerdo con lo descrito, resulta necesario entrar a verificar si existe o no mérito para dar inicio a un procedimiento sancionatorio conforme a los hechos narrados o por el contrario ordenar el archivo de la presente actuación.

FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSTITUCIONALES

Que el artículo 79 de la Constitución Nacional establece: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo”.

Que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Nacional el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Que el ambiente es patrimonio común, tanto el Estado como los particulares deben participar en su preservación y manejo que también son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social en los términos del artículo 1 del Decreto Ley 2811 de 1974.

Que la ley 99 de 1993, Por medio del cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. En su artículo 30 dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objeto la ejecución de las políticas y medidas tendientes a la protección y manejo del medio ambiente, así como dar aplicabilidad a las normas sobre el manejo y protección de los recursos naturales.

Que el artículo 31 de la ley 99 de 1993 establece las funciones de la Corporaciones Autónomas Regionales, y en su numeral 12 señala: “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos”.

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

RESOLUCION N°

120000986

2018

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR"**

Que el numeral 17 del artículo mencionado en el acápite anterior, enumera como una de las funciones a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, "Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados".

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL

Que el artículo 1 de la ley 1333 de 2009 por medio del cual establece el procedimiento sancionatorio ambiental señala: "Titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Lo subrayado fuera de texto).

Que el artículo 2 de la ley ibídem señala: "Facultad a prevención. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades". (Lo subrayado fuera de texto)

Que de acuerdo con lo establecido en el párrafo del artículo segundo de la ley 1333 de 2009, sin perjuicio de la facultad a prevención, "En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, previo agotamiento del procedimiento sancionatorio (...)". (Lo subrayado fuera de texto)

**FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES CONTEMPLADOS EN LA SENTENCIA DE LA
HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL 219 DE 2017**

INFRACCIONES AMBIENTALES CONTENIDAS EN NORMA SOBRE PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL-No puede entenderse que son aquellas que señalen las autoridades administrativas, sino aquellas resultantes del desconocimiento de la normativa ambiental que alude la Ley.

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO- Establecimiento de tipos en blanco/**PRINCIPIO DE TIPICIDAD**- Tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados

Se ha admitido que el legislador no está obligado a detallar con precisión cada uno de los elementos del tipo. Para ello los tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados, que comprenden aquellos preceptos que contienen descripciones incompletas de tales conductas, "se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles constitucionalmente, cuando pueden ser completados y precisados por el intérprete autorizado, logrando éste realizar a satisfacción el respectivo proceso de adecuación típica de la infracción". Para establecer de manera

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

RESOLUCION N°

0000986

2018

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR"**

razonable el alcance y precisión de las conductas y sus sanciones, el operador jurídico puede basarse en el mismo contexto normativo, en las remisiones de las disposiciones, en criterios técnicos, lógicos, empíricos, semánticos o de otra índole. No obstante, "si el concepto es a tal punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable, entonces dichos conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes normativos precisos.

**PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-
Aplicación**

En el ámbito del derecho administrativo sancionador el principio de legalidad se aplica de modo menos riguroso que en materia penal, por las particularidades propias de la normatividad sancionadora, por las consecuencias que se desprenden de su aplicación, de los fines que persiguen y de los efectos que producen sobre las personas. Desde esta perspectiva, el derecho administrativo sancionador suele contener normas con un grado más amplio de generalidad, lo que en sí mismo no implica un quebrantamiento del principio de legalidad si existe un marco de referencia que permita precisar la determinación de la infracción y la sanción en un asunto particular. Así, el derecho administrativo sancionador es compatible con la Carta Política si las normas que lo integran –así sean generales y denoten cierto grado de imprecisión– no dejan abierto el campo para la arbitrariedad de la administración en la imposición de las sanciones o las penas. Bajo esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad en el ámbito del derecho administrativo sancionador cuando se establecen: (i) "los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada"; (ii) "las remisiones normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de los cuales se pueda determinar la claridad de la conducta"; (iii) "la sanción que será impuesta o, los criterios para determinarla con claridad".

CONSIDERACIONES FINALES

Que una vez revisados los documentos que reposa al interior de la presente indagación preliminar, relacionados la indebida disposición de residuos RCD y residuos sólidos en predios colindantes con la ubicación del relleno Henequén, es necesario señalar que no existe razón alguna para dar inicio a un procedimiento sancionatorio ambiental, como quiera que no se logró establecer dentro del plazo establecido por la normatividad la identificación de los posibles infractores, es decir que habiendo transcurrido el plazo de seis (06) meses contemplados en la normatividad ambiental, para llevar a cabo las nuevas prácticas de pruebas según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009¹, sin que haya establecido las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las posibles infracciones se deberá ordenar el archivo correspondiente dentro de la presente actuación.

Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes disposiciones de orden constitucional y legal:

En primera medida la Constitución Política de Colombia, considerada como una Constitución prevalentemente ecológica, indica en su Artículo 209 manifiesta: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad, (...)"

En relación con los principios que rigen las actuaciones administrativas, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, señala: "Principios. Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los

¹ Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello, La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal de eximentes de responsabilidad. El término de la indagación preliminar será máximo de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de la investigación. La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

RESOLUCION N°

00000986

2018

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACIÓN
PRELIMINAR"**

principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.

En mérito de lo anterior, esta Dirección General,

DISPONE

ARTICULO PRIMERO: ARCHIVAR, la indagación preliminar ordenada mediante Auto N° 00104 del 31 de marzo de 2016, como quiera que no existe mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para asuntos ambientales y agrarios competente, para lo de su competencia de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, con base en los lineamientos establecidos en el Memorando N° 005 del 14 de marzo de 2013.

ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, tal como lo dispone el artículo 75 de la ley 1437 de 2011.

ARTICULO CUARTO: Publicar la presente Resolución en la página web de la Corporación, conforme al Art. 29 de la Ley 1333 de 2009 y 71 de la Ley 99 de 1993.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

20 DIC. 2018

Alberto Escolar Vega
ALBERTO ESCOLAR VEGA
Director General

Proyectó: Antonio Verhelst – Contratista.
Supervisó: Karen Arcón – Profesional Especializado.
Revisó: Jesús León. – Secretario General.
Aprobó: Juliette Sleman C. – Asesora de Dirección